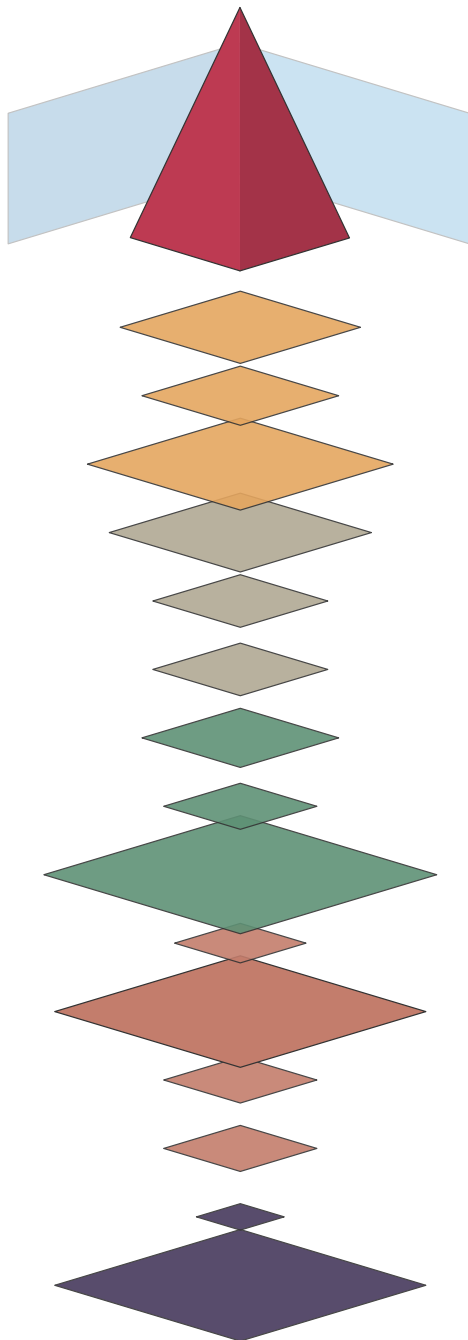



GUYANA




5,97
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

49.º de 193 países
11.º de 35 países americanos
7.º de 12 países de América del Sur


MERCADOS CRIMINALES **5,13**

TRATA DE PERSONAS	5,50
TRÁFICO DE PERSONAS	4,50
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	7,00
TRÁFICO DE ARMAS	6,00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	4,00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	4,00
DELITOS CONTRA LA FLORA	4,50
DELITOS CONTRA LA FAUNA	3,50
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	9,00
COMERCIO DE HEROÍNA	3,00
COMERCIO DE COCAÍNA	8,50
COMERCIO DE CANNABIS	3,50
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	3,50
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	2,00
DELITOS FINANCIEROS	8,50


ACTORES CRIMINALES **6,80**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	6,00
REDES CRIMINALES	5,00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	8,00
ACTORES EXTRANJEROS	7,00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	8,00


4,04
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA



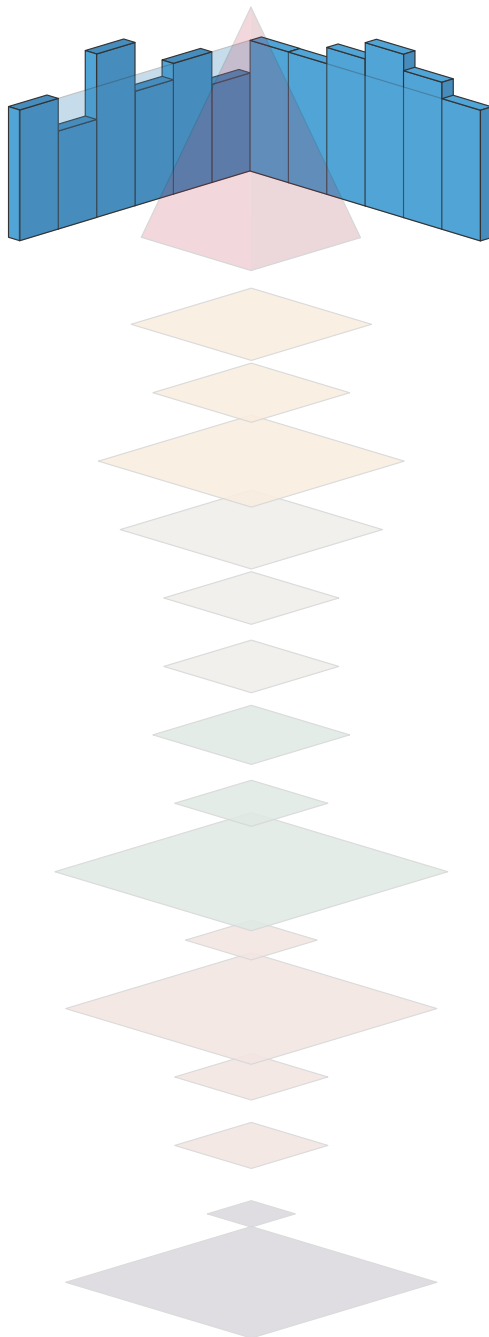
Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

 **GUYANA**



 **4,04**
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

130.º de 193 países
28.º de 35 países americanos
9.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	4,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	3,50
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	4,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	3,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	4,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	4,50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5,00
PREVENCIÓN	4,50
ACTORES NO ESTATALES	4,00

 **5,97**
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

 MERCADOS CRIMINALES	5,13
 ACTORES CRIMINALES	6,80



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Guyana es uno de los países del Caribe anglófono con mejores resultados en la lucha contra la trata de seres humanos, con esfuerzos serios y sostenidos para combatir este delito. Sin embargo, sigue teniendo dificultades para identificar e investigar este delito en regiones remotas, donde el Estado carece de capacidad. La trata de seres humanos es habitual en las explotaciones mineras, donde se trafica con mujeres, especialmente venezolanas, para trabajar en el comercio sexual. El trabajo infantil también es frecuente, sobre todo en los hogares amerindios. Guyana es tanto un país de origen como de destino para las víctimas de la trata de personas y los grupos vulnerables, como las víctimas del tráfico de personas, los jóvenes de las comunidades rurales e indígenas y las personas sin educación, corren mayor riesgo. Las redes de delincuencia organizada que operan en toda Guyana y Venezuela reclutan a mujeres necesitadas de dinero para someterlas a esclavitud sexual en burdeles situados en regiones mineras auríferas y clubes nocturnos de otras zonas del país. El tráfico de personas se sustenta en actividades relacionadas con los sectores minero, petrolero y forestal, así como con el servicio doméstico y los comercios.

Guyana también sirve como país de origen y tránsito para guyaneses y extranjeros que viajan hacia el norte, a Estados Unidos y Canadá. La porosidad de las fronteras y la escasa aplicación de la ley permiten la entrada ilegal en el país de contrabandistas procedentes de otros países caribeños, más recientemente de Venezuela, lo que expone a las poblaciones vulnerables al tráfico, los abusos y la explotación. La demanda de contrabando procede principalmente de venezolanos que buscan un medio de vida, con beneficios obtenidos por actores guyaneses y/o caribeños, así como por funcionarios corruptos a lo largo de la frontera.

Las bandas armadas, conocidas como «sindicatos», han estado extorsionando a embarcaciones y autoridades guyanesas a lo largo del río Cuyuni. Los que se niegan a pagar un «impuesto» son atacados y amenazados. Estas bandas, armadas con rifles y pistolas, están implicadas en actividades ilícitas procedentes de las regiones mineras de Venezuela. El río Cuyuni, que bordea la disputada región de Essequibo, objeto de una controversia territorial entre Venezuela y Guyana, es una importante ruta migratoria de Venezuela a Guyana y solo se tarda tres días en barco. Recientemente, no solo los sindicatos, sino también los grupos guerrilleros, están implicados en estos delitos y exigen a los mineros y a los empresarios que transportan combustible por el río que paguen un impuesto por cada barril de petróleo, utilizando el oro como moneda.

TRÁFICO

Guyana es un país de tránsito y destino para el tráfico de armas, con pruebas de que miembros de las fuerzas de seguridad del país facilitan este comercio. Una parte considerable de estas armas procede de Venezuela y de Brasil y existe poca transparencia sobre el alcance de esta actividad ilícita. Se cree que las ganancias del comercio ilegal de armas van a parar a manos de bandas brasileñas, que han llenado el vacío de poder dejado por la detención de un importante capo de la droga. A pesar de estos retos, las autoridades de Guyana han reconocido que el tráfico de armas es un problema grave y se han comprometido a desarrollar las capacidades del Estado y una estrategia regional para hacerle frente.

En Guyana abundan las falsificaciones, sobre todo de productos electrónicos, médicos, pesticidas, cosméticos y otros. También se ha informado de la incautación en Jamaica de kits falsificados para la prueba del VIH, que se exportaban a Guyana, y de un resurgimiento del comercio ilegal de pesticidas y productos químicos tóxicos falsificados, procedentes de países vecinos. Los productos falsificados también se venden por internet, con una disminución de las ventas de CD, DVD, juegos y programas informáticos falsificados, debido a la disponibilidad de opciones de streaming y descarga. Sin embargo, no hay pruebas que vinculen a las organizaciones delictivas con el comercio de productos falsificados en el país. En Guyana se ha denunciado el comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales, concretamente licores y cigarrillos. No se han identificado organizaciones delictivas en el comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales. Sin embargo, la falta de información sobre este mercado podría deberse a la falta de denuncias y a la ausencia o la laxitud de los controles fronterizos para este tipo de mercancías.

MEDIOAMBIENTE

La industria forestal legal de Guyana ha sido utilizada por grupos delictivos locales y extranjeros para blanquear dinero y como tapadera para el tráfico de cocaína. Aunque el país tiene uno de los mejores historiales de protección de la selva amazónica y unas tasas de deforestación relativamente bajas, la minería del oro, la construcción de infraestructuras, la tala de árboles y la agricultura son los principales motores de la deforestación. La demanda de madera procede principalmente de actores extranjeros y los beneficios se acumulan en el exterior. Los sistemas de verificación son cruciales para evitar la tala ilegal y para garantizar que los árboles procedentes de tierras deforestadas ilegalmente no se exporten o vendan fácilmente en el país.

Aunque el comercio ilegal de especies silvestres no es un mercado delictivo generalizado en Guyana, el país sigue

siendo fuente y punto de tránsito de animales trasladados ilegalmente a mercados de México, Singapur y Estados Unidos. El comercio de mascotas y el consumo de carne silvestre también contribuyen a las amenazas a las que se enfrenta la fauna salvaje del país, incluidos los jaguares y diversas especies de aves. La región de Rupununi, cerca de la frontera con Venezuela, es uno de los principales focos de este comercio. Aunque las economías ilícitas en torno a los delitos contra la fauna no son tan sofisticadas como en otros mercados delictivos, los intermediarios extranjeros se benefician de los altos precios que pueden alcanzar estos productos en los mercados de destino. La corrupción también puede desempeñar un papel en la facilitación de este mercado ilícito.

El tráfico de recursos no renovables, sobre todo oro y mercurio, es un problema importante en Guyana. Gran parte del oro ilegal procede de Venezuela y existen sospechas de vínculos entre el blanqueo de dinero y grupos terroristas, así como de participación en el tráfico de cocaína y armas. Se han denunciado actividades ilegales de minería y tala en varias zonas protegidas, a pesar de las advertencias y las acciones legales. Cada mes se introducen en Guyana cientos de kilogramos de oro procedentes de Venezuela y algunos de los mayores titulares de licencias de exportación de oro del país están implicados en el tráfico de oro hacia Guyana, que acaba en la cadena de suministro lícita. El mercurio se sigue utilizando en la minería a pequeña escala y se pasa de contrabando desde Guyana a los países vecinos, donde está prohibido. El metal entra ilegalmente en Guyana procedente de China y los funcionarios de aduanas suelen hacer la vista gorda. La industria del diamante también ha ido en aumento y el país se utiliza para el tránsito de diamantes procedentes de Venezuela, que se exportan ilegalmente a Europa, utilizando documentos guyaneses falsos.

DROGAS

El comercio de heroína en Guyana aumenta constantemente y la droga se trafica principalmente a través del país con destino a Estados Unidos y Europa. El mercado está controlado por delincuentes extranjeros mexicanos e italianos, que utilizan las mismas rutas del tráfico de cocaína para introducir heroína. Aunque el mercado de heroína en Guyana es pequeño, se observan signos de aumento del consumo local. Sin embargo, la mayor parte de la demanda de heroína procede de fuentes externas.

Guyana sigue siendo un país de tránsito clave para el tráfico de cocaína, ya que los traficantes utilizan los puertos poco vigilados del país, las pistas de aterrizaje remotas, las intrincadas redes fluviales, las porosas fronteras terrestres y el entorno permisivo, derivado de la corrupción y de un sector de la seguridad con escasos recursos. La cocaína procedente de Colombia entra en el país por aire, tierra y agua desde los países vecinos y los traficantes utilizan distintos métodos de ocultación, como embarcaciones sumergibles, aviones que vuelan bajo e incluso mulas humanas. Los grupos

delictivos brasileños también utilizan Guyana como punto de tránsito para los envíos a otros continentes. Aunque la demanda interna de cocaína también está aumentando, se cree que son los actores extranjeros quienes obtienen los mayores beneficios del mercado.

El cannabis es la segunda droga más consumida en Guyana, después de la cocaína. Las bandas locales controlan la venta de cannabis y el país también se utiliza como punto de transbordo de drogas destinadas a mercados lucrativos, como América del Norte, Europa y África. A pesar del bajo precio del cannabis, que sugiere que el comercio puede no ser tan grande como el de otras economías ilícitas, el aparente excedente de producción podría indicar que el país está exportando la planta. También se está desarrollando una tendencia a introducir en el país marihuana con alta concentración de THC, procedente de EUA y de Canadá, para el consumo interno.

Guyana también se ha convertido en país de tránsito y destino de drogas sintéticas, como el éxtasis y las anfetaminas, que se introducen en el país sobre todo a través de puertos compartidos con Surinam. La creciente disponibilidad de drogas sintéticas en Guyana sugiere un aumento de la demanda interna entre jóvenes y adultos jóvenes e indica tráfico hacia otros países, como Brasil. Sin embargo, la cantidad de drogas incautadas en Guyana sigue siendo relativamente baja.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los ministerios y los organismos gubernamentales guyaneses son con frecuencia blanco de ciberataques, especialmente a través de ransomware, pero los incidentes no suelen denunciarse ni hacerse públicos. Las autoridades y los analistas creen que los ciberataques suponen un riesgo considerable para las operaciones de seguridad del país, sobre todo teniendo en cuenta la riqueza petrolífera prevista en Guyana. Sin embargo, no se ha identificado a ninguna organización o grupo criminal específico como responsable de los ataques.

DELITOS FINANCIEROS

Aunque Guyana ha mejorado sus puntuaciones en términos de percepción de la lucha contra la corrupción, lo que implica que los esfuerzos del país por combatir la corrupción y promover la transparencia son reconocidos y se reflejan en las puntuaciones de percepción de la corrupción, en el país se siguen cometiendo formas relevantes de delitos financieros, por parte de actores tanto públicos como privados. En los últimos años han aumentado los casos de fraude en la contratación pública y los esquemas piramidales y Ponzi, pero hay otros delitos financieros a tener en cuenta, como la evasión fiscal y el fraude en las

transferencias bancarias, a través de cuentas de correo electrónico comprometidas. Estos casos a menudo no se denuncian y reciben poca atención.

ACTORES CRIMINALES

Tras la detención del capo de la droga más destacado de Guyana y la de otros delincuentes importantes, los líderes de las bandas en general han tratado de pasar desapercibidos, aunque su influencia sigue siendo fuerte. Aunque no está claro si los cabecillas detenidos siguen implicados en actividades delictivas, los recientes intentos de asesinato suscitan serias preocupaciones sobre el rumbo de la criminalidad en Guyana. Los grupos más grandes suelen dominar las economías legales y las ilegales, desde el tráfico de drogas y armas hasta la construcción. Si bien estos grupos no buscan apoyo público, existen informes de connivencia entre los actores criminales y el Estado a distintos niveles. La implicación de los jefes del crimen guyanés en la política subraya la profunda penetración del crimen organizado en el país.

Las redes delictivas de Guyana operan con la ayuda de funcionarios corruptos, actores políticos y empresariales de alto nivel y organizaciones extranjeras. Se dedican a diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas y el contrabando de personas, y han establecido rutas internacionales de contrabando con países vecinos como Venezuela, Surinam y Brasil. Aunque no suelen llamar mucho la atención ni utilizar la violencia, hay algunas excepciones. Debido a las amplias fronteras con Venezuela y Brasil y a la falta de presencia estatal en estas zonas, grupos delictivos locales e internacionales han tomado el control de actividades ilegales, como el tráfico de armas,

el narcotráfico y el comercio ilegal de oro y mercurio. Han aumentado los ataques de bandas venezolanas a mineros guyaneses que ejercen su oficio en el río Cuyuni y sindicatos y otras bandas guerrilleras han atacado embarcaciones de la Policía guyanesa a lo largo de este río. Las redes venezolanas dominan las actividades de trata y tráfico de personas en el país, sobre todo ofreciendo trabajos forzados y prostitución a las ciudades donde prolifera la minería ilegal. Los delincuentes extranjeros de México, Italia y Colombia desempeñan un papel importante en las economías delictivas de Guyana, incluidos los mercados de la cocaína, la fauna, el tráfico de armas y la heroína.

La presencia de agentes estatales en los mercados delictivos de Guyana es un problema grave. Las pruebas demuestran que funcionarios de los niveles más altos del aparato estatal están implicados en economías ilícitas y que los agentes estatales facilitan el funcionamiento de los mercados delictivos. Los actores corporativos se han quejado de favoritismo hacia sus competidores, a los que se acusa de proporcionar favores a funcionarios del Gobierno. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son muy corruptos y se ha denunciado que extorsionan a refugiados y a contrabandistas. Además, los partidos y los líderes políticos guyaneses tienen un historial de utilización de bandas criminales para fomentar disturbios e incluso conflictos étnicos. Dentro de los mercados delictivos del tráfico y la trata de seres humanos, las empresas mineras, forestales y, en cierta medida, agrícolas desempeñan un papel en el lado de la demanda del negocio, requiriendo mineros, trabajadores del sexo e incluso hombres indígenas en lo que puede identificarse como trabajo forzado. Las empresas madereras, arroceras, pesqueras y marisqueras se utilizan para introducir y sacar drogas de Guyana.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El poder político en Guyana está muy centralizado en el Ejecutivo, dominado por un solo grupo étnico. Esto ha provocado una división política entre el partido predominantemente indoguyanés, el Partido Popular Progresista, y el partido predominantemente afroguayanés, Una Asociación para la Unidad Nacional. Esta división se ha traducido en una desconfianza general en el Gobierno, instituciones débiles no afiliadas al Poder Ejecutivo y escasa rendición de cuentas. El descubrimiento de petróleo en alta mar tiene el potencial de aumentar la transferencia de riqueza del Estado a una pequeña élite étnica, exacerbando aún más el conflicto étnico y social, como se ha visto en otros países ricos en petróleo. Los escándalos de corrupción y la falta de transparencia durante la pandemia

de la COVID-19 han dañado aún más la credibilidad del Gobierno, mientras que la extracción ilegal de oro, el aumento de la actividad delictiva y las redes del crimen organizado influyen fuertemente en los sectores político y gubernamental. La corrupción sigue siendo un problema importante en Guyana. Aunque se han producido algunas mejoras, el clientelismo y la falta de rendición de cuentas siguen siendo frecuentes. La corrupción en la aplicación de la ley y en el sistema judicial permite a las bandas y a los elementos del crimen organizado operar con impunidad. El marco jurídico del país para el acceso a la información es deficiente y la escasa eficacia del sector público merma su capacidad para alcanzar sus objetivos de desarrollo.

Guyana ha ratificado varios tratados y convenios internacionales para combatir la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y de personas y el comercio ilícito de armas, pero el país no es muy activo en las organizaciones internacionales que supervisan su aplicación. Además, su cumplimiento y su aplicación de las normas internacionales en materia de derechos humanos, como la educación, la prevención de la violencia de género, los derechos de los pueblos indígenas y la protección de la infancia, son deficientes. Aunque Guyana cuenta con varias leyes para combatir el crimen organizado, el país carece de políticas eficaces para atender las necesidades de los refugiados y las víctimas del tráfico sexual, así como para combatir los delitos financieros y las actividades delictivas transnacionales.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial de Guyana se enfrenta a múltiples retos que impiden su capacidad para impartir una justicia eficaz. Por ejemplo, el país tiene uno de los números más bajos de jueces y magistrados del Caribe, lo que se traduce en un bajo índice de condenas. Además, las disputas políticas, la escasez de personal y la falta de recursos han afectado negativamente a los tribunales. La impartición de justicia se ve a menudo influida por la posición social y económica y las afiliaciones o las alianzas políticas, más que por el imperio de la ley. La corrupción entre los funcionarios de prisiones es otro problema, con periodos de detención preventiva que superan la pena máxima posible y una elevada superpoblación carcelaria. Las medidas no privativas de libertad se utilizan raramente y los magistrados carecen de incentivos para utilizarlas. Además, la judicatura tiene poca confianza en la eficacia de los servicios de libertad condicional.

La corrupción es también una de las principales preocupaciones en todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en Guyana, como consecuencia de la falta de recursos, la debilidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y la ineficacia del sistema judicial. Como consecuencia, la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho sigue siendo baja y la Policía de Guyana se encuentra entre los cuerpos que menos confianza inspiran en el país, debido a la presunta corrupción y a la falta de honradez de algunos de sus miembros. La Policía se enfrenta a importantes retos para mejorar sus índices de aprobación y eficacia, como la concesión de fianzas a delincuentes reincidentes y la escasez de investigadores y agentes, que abandonan el trabajo por otras oportunidades laborales. Persisten los informes sobre violencia policial, malos tratos a detenidos y duras condiciones penitenciarias y se han descubierto casos de algunos agentes implicados en actividades delictivas.

La escasa vigilancia de las fronteras de Guyana con Venezuela, Surinam y Brasil ha permitido que grupos delictivos internacionales dominaran diversos mercados delictivos, como la trata de seres humanos, el contrabando, la extracción ilegal de oro y el tráfico de armas y drogas.

Los grupos criminales de Venezuela y Brasil, por ejemplo, dominan el contrabando de mujeres venezolanas a las ciudades mineras guyanesas y el contrabando de personas fuera de Guyana. La porosidad de las fronteras también ha facilitado el tráfico de mercurio a los países vecinos, fomentando la extracción ilícita de oro en la selva amazónica. Se han producido violentos encuentros entre guerrilleros venezolanos y policías guyaneses a lo largo del río Cuyuni, lo que ha reavivado la controversia fronteriza entre Venezuela y Guyana.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades de blanqueo de dinero son frecuentes en Guyana, incluso en forma de grandes depósitos en efectivo, utilizando acuerdos falsos, y el transporte transfronterizo de metales preciosos ocultos. Las oficinas de cambio de divisas no reguladas y los comerciantes de metales y piedras preciosas también suponen un riesgo para el sistema de lucha contra el blanqueo de dinero de Guyana. Existen informes de que la mafia italiana utiliza el sistema financiero del país para blanquear cientos de millones de dólares al año. Aunque el Gobierno ha avanzado en el refuerzo de los controles, el descubrimiento de ricas reservas de petróleo y gas natural supone un nuevo reto para Guyana a la hora de seguir mejorando sus capacidades contra el blanqueo de dinero.

El sector informal de Guyana constituye una parte considerable de su economía. A pesar de ser uno de los países más pobres del hemisferio occidental, Guyana ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, gracias a los ingresos generados por las reservas de petróleo y de gas recién descubiertas. El Gobierno pretende diversificar la economía y revisar el marco normativo que rige su fondo soberano. Sin embargo, los inversores informan de mensajes contradictorios por parte de los funcionarios y es difícil determinar dónde reside la autoridad decisoria, debido a los engorrosos procedimientos burocráticos que fomentan la corrupción. La ineficacia y la corrupción en la adjudicación de contratos públicos siguen siendo motivo de preocupación generalizada, con informes sobre pagos excesivos e infracciones en la contratación pública. A pesar de los intentos de reformar los procedimientos burocráticos, la burocracia sigue siendo un problema.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

La situación de los refugiados en Guyana, especialmente de las víctimas de violencia de género y tráfico sexual, no se está abordando adecuadamente. Se han denunciado casos de extorsión a refugiados e inmigrantes por parte de funcionarios de inmigración. Las ONG y el Gobierno sí que remiten a las víctimas de trata de personas identificadas a los programas de asistencia y bienestar social disponibles, que incluyen asesoramiento, servicios médicos, asistencia jurídica y refugio, así como oportunidades de educación y formación. El Gobierno de Guyana ha informado de la

repatriación de víctimas de tráfico sexual de otros países y ha realizado esfuerzos para prevenir el tráfico de personas, mediante la coordinación de iniciativas contra el tráfico por parte del grupo de trabajo y de campañas de concienciación. Sin embargo, la existencia de refugios para hombres o niños víctimas de la trata es insuficiente y pocos miembros del personal están formados en asesoramiento sobre traumas.

Las organizaciones de la sociedad civil prestan servicios de rehabilitación de drogadictos y abogan por la reforma de la Policía y contra los abusos de los derechos humanos. Las ONG pueden operar libremente en Guyana y el Gobierno las consulta sobre iniciativas políticas. Sin embargo, los bajos niveles de gobernanza y desarrollo humano de Guyana se han traducido en bajos niveles de participación y activismo. Aunque en general se respeta la libertad de prensa, se han dado casos de funcionarios del Gobierno que han presentado demandas por difamación y han amenazado a periodistas, lo que ha generado un clima de temor entre los trabajadores de los medios de comunicación. Los medios de comunicación estatales muestran parcialidad a favor del partido en el poder y preocupa el uso de programas espía por parte del Gobierno para vigilar a los periodistas.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.